



# EL CORREO DEL PUEBLO

¡Proletarios, pueblos y naciones oprimidos  
del mundo entero, unámonos!

ORGANO CENTRAL DEL PARTIDO DEL TRABAJO DE ESPAÑA

AÑO III NUM 80

23 de Febrero de 1.977

10 ptas.

## EN ESTE NUMERO

**MOVIMIENTO OBRERO:** Huelga de la Construcción de Málaga. León, Miranda de Ebro.

pág. 4

**MOVIMIENTO DE LA MUJER:** La Mujer ante las Elecciones. Por Nuria Puig.

pág. 5

**UNIVERSIDAD:** La construcción inmediata del Sindicato Unitario de los Estudiantes Universitarios.

Por Miguel Ramírez.

pág. 6

**IDEOLOGIA Y POLITICA:** Diversas actitudes políticas ante el complot de la ultraderecha.

pág. 10

**INTERNACIONAL:** Visita al Líbano. Entrevista a Nazario Aguado.

pág. 12



CONSTITUCION DE LA CONVERGENCIA  
POPULAR VASCA

pág. 8

## Programa económico del Gobierno

NO SOLUCIONA NINGUN PROBLEMA

EMPEORA AUN MAS LAS CONDICIONES DE VIDA  
DE LA CLASE OBRERA Y EL PUEBLO

**E**L Gobierno de Adolfo Suárez ha presentado su "Programa de Actuación Económica", mantenido en el más absoluto secreto hasta el momento mismo de su presentación, y elaborado completamente a espaldas de las

masas trabajadoras y sin contar para nada con los partidos, sindicatos y organizaciones del pueblo.

La prensa había fomentado una gran expectación en torno a este "Programa", pero esta expectación era completamente artificial e infundada, ya que cualquier política económica que se proponga superar la crisis actual, conlleva elevados costes sociales que necesariamente han de pagar obreros o empresarios (según la clase que promueva esa política económica). Es evidente, que el Gobierno no quiere plantearse semejante tarea antes de las próximas elecciones.

Era previsible, por consiguiente, que sucediera lo que ha sucedido: con el poco tiempo que ya queda para las elecciones, el Gobierno no ha querido comprometerse a casi nada, no ha ofrecido ninguna alternativa a los graves problemas de la economía española ni al alarmante deterioro de las condiciones de vida del pueblo.

El Gobierno Suárez, una vez más, ha dado la espalda a las urgentes necesidades del pueblo, y ha preferido aprovechar la ocasión para presentar una especie de programa económico electoral, "teórico", sin concretar más que



unas cuantas medidas coyunturales.

El análisis que se hace en el documento del Gobierno, es un reflejo del hecho de que, paralelamente a la crisis política del Régimen, que obligó a la burguesía monopolista a imprimir mayor velocidad a sus planes de reforma, se da también una situación en la que el gran capital no puede ya manejar la economía española como lo ha hecho durante los últimos cuarenta años, sino que por el contrario, y precisamente con el fin de fortalecer y consolidar su dominación política y económica sobre las masas trabajadoras, no tiene más remedio que introducir ciertos cambios en la economía, porque ya no le sirve el viejo y maltrecho modelo económico franquista. A esto es a lo que se refiere sin duda el Gobierno, cuando habla de la necesidad de "un nuevo ordenamiento de la economía española".

### LOS GAZAPOS DE SUAREZ

SIN embargo, bajo afirmaciones "técnicas" aparentemente correctas, el Gobierno —y no por casualidad— ha metido varios gazapos, varios errores de bulto, coherentes con los intereses de la clase a la que sirve. Por ejemplo, hablando de la **inflación**, y refiriéndose a los **costes**, mantiene que la culpa la tienen los **salarios** por haber subido más deprisa que la productividad, cosa totalmente incierta, pues los datos demuestran que en el período 1963-1975, descontado el aumento del coste de la vida, el **pago por hora de trabajo** se ha mantenido por debajo del crecimiento de la productividad. Es decir, que subían los salarios, pero durante todo ese período la productividad subió todavía en mayor proporción, y el incremento fue a parar siempre a los bolsillos de los empresarios.

Otro argumento que utiliza el Gobierno es que el "excesivo aumento del consumo" ha repercutido también desfavorablemente sobre la inflación.

Este argumento falso, carente del menor rigor científico, le sirve no obstante para llegar a las conclusiones que más le interesan: "la culpa la tienen las masas trabajadoras por pedir más de la cuenta y consumir demasiado, así que son ellas las que tienen que pagar la crisis; que se consuma menos, que bajen los salarios, que suban los precios, que todo el pueblo trabajador se apriete el cinturón".

En cuanto a las medidas inmediatas, lo único que puede parecer positivo, aparte del anuncio de libertad sindical, que va veremos en qué queda, es la promesa de invertir este mismo año 50.000 millones de pesetas más de los previstos en el presupuesto. Con esta medida el Gobierno trata de crear la ilusión de que pretende combatir el paro, con el claro intento de frenar la lucha de masas, para lograr un clima de "paz social" en unas elecciones amañadas. Tal lucha contra el paro es ficticia, puesto que al mismo tiempo anuncia la "flexibilización de plantillas", lo que quiere decir que las empresas podrán despedir a

todos los trabajadores que quieran.

Por otro lado lo que no especifica el documento gubernamental es cómo ni dónde se gastarán esos 50.000 millones, ni tampoco quien los pagará, aunque sobre esto último, dada la escasa capacidad de recaudación de nuestro sistema fiscal, es evidente que se recurrirá a endeudarse todavía más con el capitalismo internacional, aumentando así nuestra dependencia del exterior.

De los salarios el documento no habla para nada, salvo para culparles hipócritamente de la inflación. ¡No hace falta, puesto que permanecen congelados hasta después de las elecciones!

Como era de esperar las medidas del Gobierno no hacen sino empeorar aún más las precarias condiciones de vida del pueblo trabajador.

### INDICE DEL COSTE DE LA VIDA: UNA DESVERGONZADA MANIOBRA

RESPECTO al índice del coste de la vida, en la última semana hemos asistido a una de las más desvergonzadas maniobras del Gobierno: el Instituto Nacional de Estadística había elaborado un nuevo sistema para determinar el índice del coste de la vida, que reflejaba más correctamente las subidas de los precios. Pero como con el nuevo sistema salió en enero una nueva elevación "excesiva" del coste de la vida (es decir, más cercana a la realidad), el Gobierno decidió prohibirlo y que volviera a funcionar el antiguo sistema, cuyas desastrosas consecuencias hemos padecido durante muchos años.

Y por si eso fuera poco, ahora, con vistas a las elecciones, el Gobierno pretende que el índice del coste de la vida refleje sólo las variaciones de los precios de los productos incluidos en el decreto del 26 de noviembre de 1.976. Es decir, que bastaría con que no suban los precios de esos pocos artículos (aunque haya que subvencionarlos), para que el índice oficial no varíe, por mucho que suban los precios de los restantes productos, con lo cual tampoco subirían los salarios.



DESPUES de anunciarnos estas medidas, claramente perjudiciales para la clase obrera y las masas trabajadoras, al Gobierno Suárez todavía le sobra desfachatez para solicitar la "respuesta solidaria de los españoles".

Por el contrario, la clase obrera y el pueblo trabajador deben denunciar las medidas concretas y todo el "Programa de Actuación Económica" del Gobierno, como contrarias a sus intereses, porque intentan descargar sobre sus espaldas todo el peso de una crisis de la que solamente son responsables los grandes capitalistas; y deben acometer las luchas convenientes por unas condiciones de vida justas ✻

# ¡ Por la legalización de todos los partidos obreros y democráticos !

EL Gobierno ha decidido denegar la inscripción en el Registro de Asociaciones Políticas a nuestro Partido y a otras fuerzas obreras y populares (P.C.E.; O.R.T.; M.C.; Partido Carlista; etc.), dejando la legalización a la decisión, que en el plazo de treinta días tome el Tribunal Supremo. Aplicando la misma ley, legaliza sin dificultades a otros partidos, como P.S.O.E.; P.S.P.; Izquierda Democrática, etc.

Esta actuación del Gobierno, dirigida a retrasar e impedir la legalización de las fuerzas obreras, mientras no pone reparos al reconocimiento legal de la Comunidad Tradicionalista de Sixto de Borbón, principal responsable —junto a otros promotores de esta “asociación” legal— de los asesinatos de Montejurra, hace suponer que es el resultado de un pacto entre el Gobierno reformista y los sectores ultrarreaccionarios del gran capital, que impulsan y financian las bandas fascistas.

Ahora parece que se va aclarando el trasfondo de la misteriosa e inesperada liberación de Oriol y Villaescusa y las contradicciones en que incurrir la policía, el Gobierno y los secuestrados, al intentar explicar los secuestros y la fantástica operación de rescate. El Gobierno parece haber llegado, en efecto, a un acuerdo con esas fuerzas ultrarreaccionarias, por el que cede al chantaje de éstas y, a cambio de que frenen por ahora la escalada del terror, dispone todo de manera que se cierre el paso a la legalización de los partidos comunistas y de otras fuerzas populares y se ofrezcan condiciones electorales favorables al bloque de la derecha franquista: Alianza Popular.

Todo esto es claramente antidemocrático. Va contra un derecho fundamental de todos los ciudadanos, el de la libre asociación políti-

ca, y constituye una abierta y monstruosa discriminación contra la clase obrera y todos los trabajadores que ven a los partidos que propugnan la defensa de sus intereses, bajo la amenaza de seguir siendo ilegales y perseguidos, mientras que organizaciones descaradamente fascistas y que son verdaderos nidos de pistoleros (Fuerza Nueva, Comunidad Tradicionalista, etc.) no encuentran el menor obstáculo.

Ante estos hechos, cabe preguntarse: ¿qué papel ha jugado la “Comisión de los 10” en la negociación con el Gobierno? Sabido es que uno de los puntos que trataron y en el que todos estaban de completo acuerdo, era precisamente la legalización de todos los partidos políticos sin exclusiones. ¿Conocían esta medida del Gobierno y no quisieron hacerla pública en su día? ¿cómo es que se mostraban, tras cada entrevista con Suárez, tan optimistas y confiados?

Se vuelve a comprobar una vez más, como la actitud sistemática de estos partidos de llevar la negociación en secreto, a espaldas del pueblo, sin apoyarse para nada en él y haciendo concesión tras concesión, no adoptando una posición exigente ante el Gobierno, sino recibiendo con sumisión lo que buenamente quiera dar, lleva a estos resultados, contrarios a los intereses del pueblo y a los principios democráticos más elementales.

Las recientes declaraciones de Tierno Galván (de la Comisión de los 10) a la prensa de Mallorca: “*Estamos haciendo muchas concesiones; está llegando el momento de ser más firmes en la negociación.*” resultan una auténtica confesión. Ahora bien, para ser consecuentes con esas palabras y no servir de cómplices a esa medida antidemocrática y antiobrero del Gobierno, los partidos de la “Comisión de los 10” deberían



tomar una actitud consecuente, exigiéndole la legalización de todos los partidos sin más trámite que su solicitud de inscripción en el Registro de Asociaciones; denunciando públicamente con los medios que le proporciona su recién estrenada legalización (de todos, salvo el P.C.E.) este atropello gubernamental, y acudiendo, si el Gobierno no accede a tan justa y mínima demanda, a medidas de presión tales como dejar la mesa de negociaciones.



QUE la legalización de nuestros partidos, obreros y democráticos esté seriamente amenazada, no quiere decir que sea algo inalcanzable. El Tribunal Supremo tiene el plazo de un mes para adoptar una solución definitiva; nosotros también tenemos un mes para levantar, impulsar y organizar una poderosa campaña de masas por la libertad de todas las fuerzas obreras y populares. Esta es hoy una batalla fundamental, clave, de la democracia.

Llamamos a todos los trabajadores y a todos los demócratas sinceros a poner el máximo empeño en esta tarea. La clase obrera y el pueblo trabajador necesitan tener a los partidos y organizaciones que defienden sus intereses en la legalidad, en plena igualdad de derechos con los partidos de la burguesía. Hay que exigir masivamente a todos los partidos que adopten una actitud consecuentemente democrática y demanden al Gobierno la legalización de todos.

Llamamos en especial a todas las fuerzas obreras y populares (partidos, sindicatos, organizaciones populares de masas...), a la más estrecha unidad de acción para impulsar la movilización de masas por este objetivo, hoy decisivo ✻

